

Ana AGUILERA RAGA

Analista. Seguridad Internacional, Terrorismo y Crimen Organizado.

Correo: a.aguileraraga@gmail.com

El papel de Libia como centro consolidado de economías ilícitas y su impacto en el fenómeno terrorista del Sahel

The role of Libya as a consolidated centre of the illegal economy and its impact on the phenomenon of terrorism in the Sahel

Resumen

El presente artículo examina el impacto de las economías ilícitas en la seguridad y estabilidad de Libia y su vecindario regional. Para ello se identifican diversas fuentes de economías ilícitas, como el contrabando de petróleo, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos y el tráfico de armas, destacando los retos de seguridad asociados a su proliferación. El documento sugiere que las economías ilícitas han contribuido a configurar la dinámica del conflicto, la gobernanza y el desarrollo en el contexto posrevolucionario.

El análisis concluye además que existe un fuerte vínculo entre las economías ilícitas en Libia y el auge del terrorismo en la región del Sahel. Los grupos terroristas han explotado el vasto mercado negro y la economía sumergida creados por el contrabando de armas, drogas y migrantes en el Sahel para financiar sus estructuras y consolidar su presencia en las rutas transaharianas. El documento sostiene que la

inestabilidad política y el conflicto en Libia han creado un vacío de poder que ha permitido el florecimiento de alianzas estratégicas entre los aparatos criminales y el extremismo violento, exportando desde Libia una importante fuente de inestabilidad regional.

Palabras clave

Libia, Fragmentación Política, Economía ilícita, Violencia, Sahel, Terrorismo.

Abstract

This article examines the impact of illicit economies on the security and stability of Libya and its regional neighbourhood. It identifies different sources of illicit economies, such as oil smuggling, drug trafficking, human trafficking and arms trafficking, and highlights the security challenges associated with their proliferation. The paper suggests that illicit economies have helped shape the dynamics of conflict, governance and development in the post-revolutionary context.

The analysis also concludes that there is a strong link between the illicit economy in Libya and the rise of terrorism in the Sahel region. Terrorist groups have exploited the vast black market and black economy created by the smuggling of arms, drugs and migrants into the Sahel to fund their structures and consolidate their presence on the trans-Saharan routes. The document argues that the political instability and conflict in Libya have created a power vacuum that has allowed criminal gangs and violent extremism to flourish, exporting from Libya a major source of regional instability

Keywords

Libya, Political fragmentation, Illegal economy, Violence, Sahel, Terrorism.

Citar este artículo:

Aguilera Raga, A. (2023). El papel de Libia como centro consolidado de economías ilícitas y su impacto en el fenómeno terrorista del Sahel. Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. N.º 21, pp. 169-192.

I. Introducción

Libia vive sumida en un constante ciclo de paz frágil y violencia desde la caída de su antiguo líder, Muamar Gadafi, en 2011. El caos que siguió al colapso del régimen de Gadafi ha creado un vacío de poder que ha permitido la proliferación de actores relacionados con la corrupción, el crimen organizado y los movimientos extremistas, con un Estado asolado por una fragmentación política y una inestabilidad económica sin precedentes.

El país se ha convertido, además, en un centro neurálgico del comercio ilícito regional y transnacional, que abarca desde la trata de seres humanos y el tráfico de drogas hasta el contrabando de petróleo y armas. La falta de una gobernanza eficaz y los constantes enfrentamientos por el reconocimiento entre facciones en Trípoli y fuerzas rivales al oeste del país han actuado de catalizador de la economía ilícita como método de supervivencia, no solo entre grupos armados y movimientos insurrectos, sino también entre gobernantes.

El comercio ilícito de petróleo y otros recursos naturales ha emergido como una de las principales fuentes de ingresos de estas organizaciones criminales, que han sabido aprovechar la falta de supervisión para sacar del país grandes cantidades de estos recursos y defraudar al Estado en beneficio propio. Además, la ubicación geográfica del país lo convierte en un punto de tránsito ideal para los traficantes de personas, que lo utilizan como puerta de entrada para introducir clandestinamente inmigrantes y refugiados en Europa (Amnistía Internacional, 2020).

Las consecuencias de la historia política y económica reciente en Libia tienen un impacto significativo en la estabilidad de la región. Algunas investigaciones incluso apuntan al largo historial de actividades criminales como el comercio ilegal de armas o el tráfico de drogas como vector de difusión de conflictos en el vecindario del Sahel, capitalizados por organizaciones extremistas violentas que exacerba los problemas de seguridad ya existentes (Micallef *et al.*, 2019:5). La crisis en Libia, que promovió a grupos terroristas penetrar más allá de sus fronteras y avanzar su agenda con limitada oposición estatal, corre el riesgo de trasladar la realidad libia al resto de la región, cronificando la presencia y el dominio del terrorismo en puntos de Mali, Burkina Faso, Níger o Nigeria.

Sobre este telón de fondo, el presente documento busca dar respuesta a dos cuestiones. Por un lado, el documento analizará hasta qué punto los diversos actores, modos y efectos de las economías ilícitas en Libia han configurado la dinámica del conflicto, la ausencia de gobernanza y la falta de desarrollo en el contexto posrevolucionario. Considerando la opacidad del volumen real de la economía ilícita en el país, así como las evidentes limitaciones de acceso a la información y la necesidad de fuentes humanas para producir datos primarios, el análisis confía en fuentes provenientes de canales oficiales y centros de investigación de reconocido prestigio. En el primer caso se tratan fuentes de organismos oficiales dedicados a la investigación y monitorización de las

economías ilícitas, mientras que el segundo se centra en publicaciones de especialistas en el análisis de las cuestiones de seguridad en Libia y su vecindario regional.

Por otro lado, y considerando la naturaleza de las economías ilícitas y su impacto sobre la seguridad y la estabilidad de la región, el presente artículo examina si el contexto libio ha alimentado activamente el surgimiento de los movimientos extremistas violentos en el Sahel, un ejercicio de gran repercusión que permitirá entender y abordar una de las principales amenazas a la seguridad global en la actualidad. Para ello, el artículo se sirve de informes y fuentes de referencia en el ámbito del contraterrorismo como los informes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialistas en el ámbito del extremismo violento, resultados de las operaciones de las fuerzas de seguridad e investigaciones de grupos de trabajo multilaterales destinados a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El trabajo expone, en primer lugar, un breve análisis contextual del actual orden político en Libia como antesala del papel de la economía política en las dinámicas del comercio ilícito en el país, perfilando el panorama de conflicto en curso que ayudará a entender la importancia creciente de la economía ilícita y sus principales actores. Posteriormente, el artículo analizará cómo el conflicto libio se encuentra exacerbando la crisis en el Sahel y el aumento de la interacción entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas, con Libia en el centro de este entramado delincencial.

2. El actual orden político de Libia

Libia se encuentra actualmente en estado de guerra civil e inestabilidad cronificada, atrapada en ciclos de violencia y estancamiento político. El país lleva dividido desde 2011, cuando un levantamiento popular abanderado por la generación joven se alzó contra el régimen y derrocó al dictador Muamar Gadafi. Tras muchas reformulaciones y capitulaciones por el poder, dos primeros ministros se disputan el reconocimiento como gobierno *de iure* en la actualidad: el Gobierno de Unidad Nacional (GNU, por sus siglas en inglés), dirigido por Dbeibah y con sede en la capital, Trípoli, y el gobierno respaldado por la Cámara de Representantes dirigido por Fathi Bashagha (Security Council Report, 2022: 1).

Desde Tobruk, en el este, es Jalifa Haftar, al frente del poderoso autoproclamado Ejército Nacional Libio (ENL), quien controla *de facto* gran parte del este y el sur del país. Una figura decisiva entre las facciones rivales, Haftar ha buscado gobernar sobre la totalidad de Libia, pero su fracaso le ha llevado recientemente a contrapesar sus inclinaciones entre los líderes políticos en Trípoli para favorecer -no sin bastantes reticencias- sus intereses políticos y personales apoyando al gobierno de Bashagha. La presencia de mercenarios, milicias armadas, combatientes extranjeros y potencias internacionales involucradas ha terminado por recrudecer todavía más el conflicto, quedando estancado el proceso político durante más de una década.

El GNU, que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas y de varios países occidentales, tiene su sede en Trípoli, mientras que Bashagha ejerce su poder desde Sirte y Bengasi (Security Council Report, 2022: 5). El primero es blanco regular de las fuerzas de Haftar desde Tobruk, al que respaldan varios países de la región, entre ellos Egipto y Emiratos Árabes Unidos, y ha ido ganando terreno en los últimos años.

La situación política del país es endeble, con diversos actores disputándose el poder y dejando pasar sistemáticamente las oportunidades de reconciliación nacional. A pesar de que el GNU y Haftar entablaron negociaciones de paz, seguido de un cese de las hostilidades a finales de 2020, hasta ahora no se ha alcanzado ninguna solución duradera. Algunos tímidos pasos se están intentando tomar en esta dirección: ejemplo de ello es la reciente aprobación de un mecanismo de coordinación por parte de la Comisión Militar Conjunta (CMC) 5+5¹ y los comités de enlace para la retirada de mercenarios y combatientes extranjeros del país (UNSMIL, 2023).

El actual conflicto en Libia ha provocado una violencia y un sufrimiento humano sin precedentes, con miles de muertos y más de 1.5 millones de desplazados (IDMC, 2022). La grave situación humanitaria del país se caracteriza por la falta de acceso a productos de primera necesidad, como alimentos, agua y atención sanitaria, y sigue pendiente la aprobación de un presupuesto nacional para mejorar las infraestructuras o los servicios básicos (OCHA, 2022). La ONU calcula que 800.000 personas necesitaron ayuda humanitaria en 2021, una cifra dramática si se tiene en cuenta que la población libia era de 6,735 millones de personas ese mismo año (Banco Mundial, s.f.). Además, la guerra civil ha devastado la economía del país al interrumpir la exploración petrolífera y dejar la producción de petróleo y gas en mínimos históricos, lo que ha provocado hiperinflación y escasez de productos básicos (Shaltami, 2019: 6). Los continuos combates también han obstaculizado la prestación de servicios básicos, como la electricidad y la educación, poniendo la frágil paz en riesgo de deshacerse en cualquier momento.

La comunidad internacional se ha esforzado por encontrar una solución al conflicto. Naciones Unidas ha liderado los esfuerzos y ha intentado mediar en un acuerdo de paz entre las facciones enfrentadas, aunque el proceso de paz se ha visto complicado por la implicación de países extranjeros, que han prestado apoyo a ambas partes del conflicto.

La política de la Unión Europea (UE) hacia Libia está orientada hacia la mejora de la seguridad fronteriza y la gestión de los flujos migratorios, los cuales se consideran grandes retos de seguridad para Europa. Esta política forma parte de los esfuerzos más amplios de la UE para hacer frente a la inestabilidad en la región del Sahel y contrarrestar la amenaza terrorista que suponen movimientos como el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y el Estado Islámico en el Sahel (EI-Sahel o IS-Sahel). Desde la caída de Gaddafi, la Unión Europea ha desempeñado un papel activo en el apoyo a la securitización del país, pero sus esfuerzos se han visto plagados de desafíos e intereses divergentes entre sus Estados miembros.

1 El comité está formado por cinco miembros del GNU y cinco miembros de las fuerzas de Jalifa Haftar.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la UE en Libia es el conflicto y la inestabilidad persistentes, dificultando que la UE coordine sus esfuerzos y alcance sus objetivos en el país. A esto se le deben añadir las diferentes motivaciones entre los Estados miembros. Algunos países, como Italia, tienen grandes intereses de estabilización debido a su proximidad a Europa y a los posibles flujos migratorios, pero también comerciales². Otros países, como Francia, están más centrados en la lucha antiterrorista y han sido acusados de apoyar a distintas facciones en el conflicto³. Sin embargo, los intereses económicos italianos pueden complicar los esfuerzos de la UE para abordar los retos políticos y de seguridad en Libia. Los funcionarios libios consideran, además, que las acciones de Francia contradicen la política oficial conjunta europea de apoyo al GNU. La principal fuente de influencia de la UE en Libia es su peso diplomático, en particular el de Francia y el Reino Unido, y las divergencias de intereses han dificultado que la UE hable con una sola voz y ha limitado su capacidad para tomar medidas decisivas que afecten a la totalidad del país.

Aún con todo, los funcionarios libios ven a Europa como un importante socio energético y una fuente potencial de legitimidad política y apoyo financiero. Sin embargo, también son conscientes de que Europa es un complejo mosaico de Estados e intereses enfrentados. Los funcionarios libios entienden que los miembros de la UE pueden provocar un cambio político en Libia por medios diplomáticos, económicos y militares y que, a su vez, pueden verse influidos por la política libia (el-Gomati, s.f.).

Por su parte, Egipto y Emiratos Árabes Unidos apoyan financiera y armamentísticamente a Haftar y sus fuerzas aliadas, mientras que Rusia ha permitido al ENL consolidar su dominio en el flanco oriental y sur, donde la mayoría de los yacimientos petrolíferos del país se encuentran (*The Economist*, 2019). Con presencia de 2.000 contratistas del Grupo Wagner desde 2019, los mercenarios se organizan a caballo entre Libia y Ucrania a petición del Kremlin en la actualidad. En el primero, por su parte, contribuyen a la campaña de Haftar para arrebatar el control del país a los gobiernos y fuerzas a favor del GNU, una herramienta de presión rusa para desestabilizar al vecindario europeo. Y es que Libia posee unas reservas de petróleo de 48.000 millones de barriles y de más de 1 billón y medio de metros cúbicos de gas natural, lo cual lo establece como un potencial gigante energético a las puertas de Europa (Unlacke, 2022).

Con casi el 40 % de las reservas totales de petróleo de África, más de dos tercios se exportaron a los países de la Unión Europea en 2020, algo que Wagner busca subvertir

2 Como puso de relieve la reciente visita de Meloni a Libia, hay importantes intereses económicos en juego para Italia. La visita de la primera ministra tenía por objeto firmar un importante acuerdo de gas con Libia, lo que pone de relieve el interés de Roma por asegurarse recursos energéticos y la cooperación económica con su vecino norteafricano. Más información, disponible en: <https://www.reuters.com/world/italys-meloni-expected-sign-major-gas-deal-she-starts-libya-visit-2023-01-28/>

3 Según analistas sobre el terreno, los funcionarios libios acusan a Francia de prestar apoyo a la ofensiva de Haftar y obstruir los esfuerzos diplomáticos de la UE para imponerle sanciones. A pesar de las numerosas evidencias, Francia niega estas acusaciones, y los funcionarios públicos se inclinan por la posibilidad de que París busque una nueva alianza con sus socios de Oriente Medio y el norte de África en Libia. Más información, disponible en: https://ecfr.eu/special/mapping_eu_leverage_mena/libya

para no frenar la dependencia energética europea en Rusia y virar hacia un potencial socio energético en Libia. Para ello cuenta con la presencia y control del Grupo Wagner en yacimientos petrolíferos de elevados niveles de producción de crudo, como el de Sharara, al suroeste del país, o de bases militares desde la periferia de Sirte hasta Brak, cerca de Sabha (Unlacke, 2022). Los mercenarios de Wagner actúan deliberadamente para perseguir los intereses geopolíticos de Moscú en Libia y proyectar su fuerza en el resto de África, llegando a operar incluso de manera independiente a las fuerzas de Haftar y escapando a su control.

Mientras tanto, Turquía abanderará la resistencia a las tropas de Haftar y sus aliados internacionales, aunque por el camino aprovecha para avanzar su agenda energética y reconfigurar sus fronteras marítimas con Libia de forma que les permita continuar explotando en la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos. Ejemplo de ello se dio en la firma del *Memorandum of Understanding (MoU)* entre Turquía y el gobierno de Dbeibah en octubre de 2022, que permitiría la prospección de actividades de perforación en zonas económicas exclusivas de otros países, incluidas las de Chipre y Grecia (AFP, 2022).

A nivel de reconfiguración del régimen político en Libia, tanto Ankara como París buscan una reanudación electoral para el establecimiento de un sistema presidencial, algo que encuentra oposición entre las facciones rivales, a pesar de que las elecciones parlamentarias también cuentan el veto de los órganos legislativos rivales para mantener sus escaños (Lacher, 2023). Por su parte, los líderes de las decenas de milicias armadas que actúan a voluntad de los gobiernos rivales están adoptando un papel cada vez más relevante en política, sentándose en la mesa de negociación y llegando a establecer un clientelismo incrustado en el seno del aparato político libio.

Así, Libia se enfrenta a una crisis compleja desde la caída del régimen de Gadafi en 2011, que ha provocado la fragmentación del país, la aparición de múltiples centros de poder y el colapso de las instituciones estatales. La continua inestabilidad y el vacío de gobernanza han permitido a grupos criminales operar con relativa impunidad, lo cual ha llevado a la consolidación de economías ilícitas y promover la consolidación de actividades extremistas -como es el caso del terrorismo- en su flanco sur.

3. La economía política en las dinámicas del comercio ilícito

Las economías ilícitas en Libia se han convertido en un aspecto crucial del panorama posrevolucionario de 2011, ya que se entrecruzan con las diversas dimensiones del conflicto, moldeándolas en su beneficio. El comercio ilícito representa una importante fuente de poder, riqueza e influencia para los actores implicados, y ha creado un mercado paralelo que opera al margen del control y la regulación del Estado.

Según las investigaciones del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, a menudo son los representantes del propio aparato estatal los que se entremezclan con actividades ilícitas, con un

gran volumen de corrupción que socava de manera sistemática la legitimidad de las instituciones. La malversación en el propio Estado, en un país donde el sector público emplea entre el 70 y el 85 % de las personas en edad de trabajar, constituye un mercado ilícito importante en áreas como la construcción o la asignación de contratos públicos (UNICRI, 2021: 20).

Los especuladores de la guerra de Libia se nutren de los activos tangibles del país, creando patrocinios y redes clientelares que permiten reinvertir su capital para obtener beneficios no solo en tiempos de guerra, sino también en un eventual escenario posconflicto. El sector inmobiliario suele ser el objetivo más atractivo. Según el investigador del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad Wolfram Lacher, existen una serie de fuentes locales que sostienen que familiares de Dbeibah —al frente del Gobierno occidental en Trípoli— emplea a terceros para hacerse con propiedades en el lujoso distrito de Hay al-Andalus, mientras que los líderes de las diferentes milicias en uno y otro bando se han hecho con complejos turísticos de playa, cafeterías y clínicas privadas, entre otros (Lacher, 2023).

En Bengasi, los comandantes al servicio de Haftar han sabido sacar provecho de su poder, apropiándose de viviendas de supuestos terroristas que fueron desahuciados a la fuerza de sus casas. Por parte de hombres de negocio, ejemplos remitidos al investigador defienden la adquisición de nuevos centros comerciales por parte de un empresario con un historial relacionado con el contrabando de drogas y vínculos con uno de los dos hijos de Haftar, Sadam⁴. Según Lacher, es precisamente el mismo Sadam dueño (informal) de un banco privado en Bengasi, el cual ha utilizado para financiar Berniq Airways, una nueva compañía privada de vuelos (Lacher, 2023).

Varias fuentes locales se hicieron eco también del informe anual de la Oficina de Auditoría de Libia para 2021, publicado en 2022. En el informe, dirigido a supervisar la situación financiera del país, se denunciaron las infracciones detectadas en el Gobierno de Unidad Nacional, el Banco Central de Libia (BCL) y la Corporación Nacional del Petróleo (CNP). Entre otros ejercicios ajenos a la transparencia, los auditores dejaron constancia de un supuesto uso por parte del GNU del presupuesto destinado a gastos de emergencia para reservar vuelos y hoteles, así como para obsequiar con regalos y otros servicios al primer ministro Dbeibah. También para adjudicar contratos de desarrollo sin necesidad de pasar por concurso público (El-Assasy, 2022).

El entramado de especuladores privados y activos públicos que se benefician de su posición para enriquecerse es una lista muy larga. Sin embargo, esta práctica no es ninguna novedad, pues el crimen organizado operativo en Libia tiene sus raíces en el legado de corrupción y depredación dirigidas por el Estado bajo el régimen de Gadafi, que cooptó y se apoyó en redes delictivas para su propia supervivencia y expansión. Fue precisamente el colapso de la estructura estatal y la proliferación de grupos armados tras la revolución lo que creó un vacío de poder que permitió a estas redes florecer y

4 Según uno de los mayores analistas especializados en Libia, Wolfram Lacher, en 2022 el empresario publicó vídeos donde compraba un halcón de caza por un millón de dólares, para después regalárselo a Sadam. Fuente: *New Left Review*.

diversificar sus operaciones, para contar, en la actualidad, no en un régimen corrupto bajo un solo dirigente sino en una estructura criminal compleja de enjuiciar donde se engloban funcionarios, líderes de milicias, hombres de negocio y señores de la guerra. Estos se han convertido en actores clave del conflicto actual, proporcionando no solo auto enriquecimiento, sino también financiación, logística y recursos humanos a los bandos enfrentados.

El comercio ilícito de petróleo, que representa la mayor parte de la riqueza del país, ha sido especialmente significativo en la economía criminal libia, con pérdidas estimadas en casi mil millones de dólares anuales (Kirchgaessner y Tondo, 2018). El país posee las mayores reservas de petróleo de África y el colapso de las instituciones estatales y la guerra civil en curso han permitido a bandas criminales y milicias armadas explotar los recursos petrolíferos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, en 2018, a seis individuos, 24 entidades y siete buques por beneficiarse ilícitamente del petróleo libio (Departamento del Tesoro, 2018). En varias ocasiones, incluso se ha acusado a las fuerzas de Haftar de estar beneficiándose, a través de una red de apoyo del exterior, del mercado ilícito de los yacimientos petrolíferos que el ENL ha conseguido hacer a su control. En 2020, en pleno bloqueo petrolero y pozos petrolíferos clausurados, algunas fuentes de seguridad denunciaron la firma de un acuerdo ilegal por parte de Haftar para monopolizar el sector petrolero del país, ignorando a la CNP. Las investigaciones también han revelado extensos vínculos entre las brigadas leales a Haftar en el contrabando de productos petrolíferos en instalaciones como la de al-Sarir (Noria Research, 2019: 15).

El comercio ilegal de petróleo ha ocasionado importantes pérdidas al Estado libio, así como a las compañías petroleras internacionales que operan en el país. La falta de control estatal sobre las instalaciones y terminales petrolíferas, unida a la ausencia de una marina y una guardia costera eficaces, ha facilitado el robo y la exportación de crudo y productos refinados, principalmente a Europa y Turquía, por parte de diversos actores, incluidos grupos armados, contrabandistas privados y funcionarios corruptos. Y es que, a lo largo de la última década, los declarados gobernantes —como funcionarios del Estado, hombres de negocios o líderes de milicias— han sabido sacar rédito a un enriquecimiento ilícito sin precedentes, aprovechando su posición e influencia. Un ejemplo es el de Fahmi Salim Musa Ben Khalifa. Famoso traficante de armas y contrabandista de personas y petróleo (apodado el «rey del contrabando»), este individuo se dedicaba a vender, antes de su arresto en 2017, productos petrolíferos de contrabando en el mercado negro a un precio más barato (Zaptia, 2017). Su actividad en las ciudades costeras de Zuwara, Zawia y Sabratha estaba relacionada con el contrabando de petróleo, pero también se le acusa de ejercer actividades de compraventa de propiedades y de construcción de complejos turísticos en Malta y Turquía.

En el caso de vínculos con el terrorismo, la lista de evidencias también es densa. En diciembre de 2019, la Dirección Central de Investigaciones de Bengasi, alineada con el ENL, arrestó a dos individuos sospechosos de contrabando, en cooperación con un ciudadano egipcio, con la intención de financiar al autoproclamado Estado Islámico

(US Department of State, s.f.). Tras las detenciones, se recuperaron armas de fuego y munición en los domicilios de los individuos. Ambos confesaron e identificaron a otros dos sospechosos, y sus expedientes fueron trasladados a la fiscalía de Bengasi.

Las operaciones de contrabando de petróleo no solo han socavado la legitimidad y los ingresos del Estado libio, sino que también han creado un mercado paralelo que alimenta el conflicto, subvierte el proceso de paz y amenaza la estabilidad de la región. Estas actividades también han tenido un profundo impacto en la economía libia, ya que han contribuido a la devaluación de la moneda, la escasez de combustible y la erosión de los ingresos del Estado. Además, el comercio ilícito de petróleo ha creado un mercado paralelo que opera fuera del control estatal y de la comunidad internacional, y que amenaza la estabilidad de la región y el medio ambiente.

El contrabando de petróleo desde Libia no solo ha afectado a la propia Libia, sino también a sus países vecinos, como Túnez y Egipto, ya que partes de su territorio se utilizan como rutas de tránsito para el comercio ilegal. Ello ha ocasionado importantes pérdidas a estos países, así como a las compañías petroleras internacionales que operan en la región. Además, muchas empresas internacionales se han visto perjudicadas por el comercio ilegal de petróleo en Libia, ya que el petróleo de contrabando suele venderse a un precio más barato, lo que merma sus operaciones e ingresos. Además, los beneficios derivados del contrabando de petróleo se han utilizado para financiar las actividades de grupos extremistas, perjudicando a muchos países de la región.

Libia es un importante punto de tránsito para los migrantes de países en conflicto que intentan llegar a Europa, lo que da lugar a explotación y abusos por parte de organizaciones delictivas. En 2021, el número de salidas de Libia hacia Europa aumentó un 150 % (Departamento de Estado de EE. UU., s.f.), y muchas víctimas sufrieron esclavitud e incluso la muerte en el camino.

Se calcula que todavía hay cientos de miles de migrantes y refugiados en Libia, muchos de los cuales están atrapados en centros de detención donde se les somete a condiciones horribles, incluyendo episodios de tortura, violaciones y trabajos forzados. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la guardia costera libia presuntamente colabora con grupos armados y otras organizaciones delictivas, incluidos traficantes, para explotar a los migrantes con fines lucrativos (US Department of State, s.f.). La falta de aplicación de la ley y de ayuda humanitaria, combinada con la explotación y el abuso de los migrantes por parte de contrabandistas, grupos armados y agentes estatales, ha creado una crisis humanitaria que se podría catalogar como esclavitud moderna. Según fuentes internacionales, individuos vinculados a redes de trata de personas están además involucrados en operaciones de contrabando de petróleo, beneficiándose de la venta de mano de obra migrante a las instalaciones petrolíferas (UN News, 2018).

El aumento de la migración a Europa ha puesto a prueba los recursos y creado tensiones políticas entre los Estados miembros de la UE, lo que ha llevado a centrar la atención en la seguridad de las fronteras y la limitación de la inmigración. La UE ha apoyado a las autoridades libias en la gestión de sus fronteras y el desarrollo de

políticas disuasorias de la inmigración irregular. Sin embargo, la política europea también ha suscitado críticas por descuidar la situación humanitaria y no abordar las causas profundas de la crisis (Salah, 2023).

El impacto de la crisis migratoria en Libia sobre la seguridad europea ha sido significativo, especialmente a la luz de la actual crisis terrorista en el Sahel. El vacío de poder generado por la inestabilidad en Libia ha sido aprovechado por diversos grupos armados, entre ellos organizaciones terroristas como Daesh y Al Qaeda. Estos movimientos han utilizado Libia como base para sus operaciones intrarregionales e interregionales, lo que ha supuesto una grave amenaza para la seguridad europea y sigue planteando numerosos riesgos. En respuesta, la UE ha tratado de reforzar su presencia militar en el Sahel, colaborando estrechamente con los socios regionales para contrarrestar la amenaza terrorista. A pesar de ello, se ha cuestionado que la atención de la UE a la seguridad y la lucha antiterrorista se haga a expensas de abordar los abusos y otras violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad locales (Freudenthal *et al.*, 2021), una crítica similar a la postura de la UE en Libia.

La proliferación del tráfico de drogas en Libia es otra cuestión crítica con importantes repercusiones para el país y para la región en general. La falta de un aparato estatal unificado y la proliferación de grupos armados tras las revueltas que dieron lugar al colapso del régimen en el 2011 han creado las condiciones para que florezca un entramado de redes criminales que conectan a África Occidental en general con el mercado de la droga y los consumidores finales, especialmente en Europa y América (Aguilera, 2022: 54).

El tráfico de drogas en Libia no es un fenómeno nuevo, pero su escala y alcance han aumentado drásticamente en las últimas décadas. El país ha terminado por convertirse en un centro neurálgico del narcotráfico, con redes delictivas que se aprovechan de la porosidad de sus fronteras, la debilidad de sus instituciones y la falta de aplicación de la ley. En el caso de la cocaína, la mercancía suele transitar desde su centro de producción en América del Sur hacia Europa a través de Libia, con unos beneficios generados por este comercio desorbitados que suelen aprovechar grupos armados, clanes, mercenarios y grupos terroristas (Aguilera, 2022).

La producción de cannabis y sus derivados en Marruecos conecta con los mercados europeo y africano a través de Libia. De hecho, Libia actúa como uno de los enclaves más importantes en la distribución de esta droga a nivel regional, recibiendo envíos tanto por el oeste desde Marruecos como por el este desde Líbano. El paso de Salvador, un paso fronterizo entre Argelia, Níger y Libia, sirve de centro de tránsito para distribuir la droga a Egipto y Europa a través de los puertos de Al-Khoms y Tobruk. Sabha es un punto importante para el tráfico, y Bengasi, Al-Khoms, Misrata, Tobruk y Trípoli sirven como centros de almacenamiento y distribución (Aguilera, 2022: 55; Mangan, 2020:8; Micallef, 2019: 6).

En los últimos años, el tráfico de drogas se ha convertido en un componente importante de las economías ilícitas en Libia, y su impacto en la región está bien documentado por operaciones regionales e internacionales. Estas operaciones han

revelado la implicación de redes de delincuencia organizada en el tráfico de drogas, como la macrorredada Lionfish, que incautó, en 2021, 17 toneladas de cannabis en Niamey (Níger) con destino a Libia por valor de más de 30 millones de euros (INTERPOL, 2021).

Según un oficial de las Naciones Unidas destinado en Guinea-Bissau en 2013, África Occidental sirve de importante ruta de tránsito para el narcotráfico mundial, ya que al menos 30 toneladas de cocaína pasan anualmente por la región. Los narcotraficantes malienses contribuyen especialmente a facilitar esta ruta (Tinti, 2020: 6). Como resultado, África Occidental se ha convertido en la cuarta ruta de entrada de cocaína en el continente europeo, con aproximadamente 50 toneladas de droga, por valor de unos 2.000 millones de dólares, que se infiltran en la región cada año (Ortega, 2021).

La cantidad de incautaciones de cocaína en África Occidental ha aumentado considerablemente de 2015 a 2019, con casi 13 toneladas confiscadas en 2019, principalmente en las regiones septentrional, occidental y central del continente (UNODC, 2021: 29). Las autoridades colombianas llegaron a afirmar en 2007 que más de un tercio de la cocaína procedente de Sudamérica pasaba por África en algún punto de la cadena de suministro de camino al mercado europeo, habiendo triplicado su tamaño en la década de los diez (Blanco y De la Corte, 2013: 6).

El tráfico y contrabando de drogas en África subsahariana, especialmente en el Sahel occidental, es un escenario complicado por la implicación de numerosos actores con diferentes intereses y capacidades. Las figuras políticas con influencia política suelen ser los actores elegidos por la delincuencia organizada debido a su alto nivel de discreción y poder, y a menudo se ha descubierto que participan en operaciones de narcotráfico en Níger, Malí y Guinea-Bissau. En este último, los elevados niveles de corrupción y clientelismo han permitido a los traficantes obtener colaboradores institucionales sobre el terreno, desde sobornos puntuales hasta una auténtica simbiosis con las instituciones estatales (Aguilera, 2022: 37).

La delincuencia organizada transnacional se cruza a menudo con actores locales que tienen intereses y motivaciones contrapuestas, pero están dispuestos a aprovecharse de los beneficios económicos del tráfico de drogas. Los grupos étnicos y líderes comunitarios de las regiones que habitan añaden una dimensión étnica al conflicto y a la lucha por los beneficios del narcotráfico, con ejemplos en Mali de cooperación entre actores locales de tribus árabes y tuareg que anteriormente mantenían posiciones antagónicas. Estas complejas redes operan con altos niveles de secretismo, lo que dificulta el acceso de las fuerzas de seguridad.

La economía de la cocaína se ha convertido en una importante fuente de ingresos para grupos terroristas, facciones armadas y organizaciones delictivas del Sahel. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), África Occidental se ha convertido en un importante centro de tránsito para el tráfico de esta sustancia, que no ha dejado de experimentar un crecimiento dramático durante los últimos años (UNODC, 2023: 106). Se cree que la mayor parte de la cocaína se destina a los mercados europeos, al encontrarse el continente africano

más próximo en términos geográficos a América del Sur que Europa, y al ser menos férreos los controles marítimos y aéreos de entrada que los que los grupos criminales encuentran en los mercados finales (Aguilera, 2022: 26).

A pesar de las dificultades para establecer el grado de vinculación entre ambos grupos criminales, la relación entre el contrabando de cocaína y la financiación del terrorismo en el Sahel y la cuenca del Lago Chad ha sido ampliamente documentada por diversas fuentes, descubriendo a este mercado como una fuente de ingresos para individuos pertenecientes a grupos yihadistas como Al Qaeda en el Magreb Islámico (Brown, 2013: 22; Raineri y Martini, 2017: 5; Zimmerer, 2019: 11), Ansar al Din, Al Murabitún o Boko Haram (Aguilera, 2022: 81-85; Sampaio, 2022: 22).

Existen pruebas de que el tráfico de cocaína contribuye significativamente a la financiación de los grupos armados en los países del Sahel y suele ser una de las causas de los conflictos y la violencia (International Crisis Group, 2018). En el norte de Malí, el control del tráfico de drogas se ha sumado a otros motivos de disputas intercomunales, lo que ha provocado un aumento de la violencia y la inestabilidad en la subregión (International Crisis Group, 2018). La presencia de redes delictivas ha provocado conflictos entre objetivos económicos, políticos e ideológicos entre actores no estatales, obstaculizando la aplicación de los Acuerdos de Argel de 2015 en el norte de Malí (Tinti, 2020: 10). La Coordinación de los Movimientos del Azawad (CMA) reconoció en una entrevista con International Crisis Group haber escoltado un cargamento de droga codiciado por el Movimiento Árabe del Azawad (MAA-Plataforma) en 2018, lo que dio lugar a la ofensiva de Ménaka entre ambos grupos armados, poniendo de manifiesto los posibles beneficios de este mercado criminal (International Crisis Group, 2018: 15).

El impacto de la economía de la cocaína en la situación de seguridad de la región del Sahel y su vinculación con actividades terroristas y delictivas es motivo de preocupación para los responsables políticos europeos. La economía ilícita tiene importantes consecuencias para la seguridad y la estabilidad de Libia, al considerarse una macroestructura con conexiones en África, Oriente Medio y los distribuidores finales en Europa. Además del tráfico de drogas, el conflicto libio ha creado oportunidades para el contrabando y el tráfico ilícito de armamento, sobre todo en la región transahariana. La ausencia de una autoridad central, la deserción de fuerzas de seguridad y la proliferación de grupos armados en el país han facilitado el tráfico de este armas y munición a través de la frontera, recuperando las armas de los copiosos arsenales de la época de Gadafi, del campo de batalla o interceptándolo sin autorización de otros actores participantes en el conflicto. La inestabilidad de la región, a su vez, ha abierto un nuevo mercado demandante de armas, al buscar tanto grupos armados como la población adquirir medios para defenderse o promover sus intereses. En 2018, teniendo en cuenta una proporción por cada 100 habitantes, la plataforma Small Arms Survey afirma que el país con más armas en posesión privada fue precisamente Libia, con 13.27 armas por cada 100 habitantes (Small Arms Survey, 2020). La caída del régimen de Gadafi abrió nuevas oportunidades para las redes criminales y transformó al país en uno de los nudos centrales del contrabando y la

venta de armas, tras desaparecer el poder del dirigente que poseía el férreo monopolio de todo negocio relacionado con el tráfico y el contrabando de armas de fuego.

El tráfico transahariano de armas desde Libia constituye una grave amenaza para la estabilidad regional, alimentando los conflictos y exacerbando las tensiones existentes. El comercio transfronterizo de armas también está relacionado con la economía mundial en general. La demanda de pistolas, rifles, ametralladoras, granadas o munición en la región crea un mercado para comerciantes y traficantes de armas dispuestos a aprovecharse de la inestabilidad en Libia, desviando el cargamento a otros conflictos en curso, como Irak o Siria (Conflict Armament Research, 2017: 7).

Las economías ilícitas, incluido el tráfico de drogas, personas y armas, tienen un impacto económico significativo en las regiones en las que operan. Este impacto va más allá de los beneficios directos e incluye efectos económicos indirectos, como el desarrollo de mercados locales, el blanqueo de dinero y la corrupción. Estas economías ilícitas también pueden conducir a la desestabilización de las economías y las instituciones, lo que puede afectar a las regiones vecinas. La región del Sahel, en particular, es vulnerable a la propagación del extremismo violento debido a los vínculos entre las economías ilícitas y las organizaciones terroristas. La reproducción de estas economías en Libia proporciona recursos adicionales a estos grupos, lo que supone una mayor amenaza para Europa a través de la financiación y la realización de atentados más allá de sus fronteras.

4. Cómo el conflicto libio alimenta el terrorismo en el Sahel

La reproducción del impacto económico de las economías ilícitas de Libia supone un riesgo para el resto del norte de África, el Sahel y Europa. La propagación de estas economías ilícitas desestabiliza aún más unas economías y unos sistemas políticos ya de por sí frágiles, provocando un aumento de la violencia, corrupción y actividad delictiva. Estos factores son clave como vectores de desarrollo de flujos migratorios y de refugiados, debido a la obligación forzada de las personas a huir de sus hogares por la violencia y la inestabilidad económica.

Especialmente en el Sahel, las economías ilícitas de Libia alimentan los conflictos violentos y la inseguridad. Los diversos actores implicados en el conflicto, la gobernanza y el desarrollo en Libia tienen diferentes intereses, motivaciones y capacidades que influyen en sus funciones y acciones en relación con el comercio ilícito y sus efectos indirectos. Las repercusiones de las economías ilícitas de Libia en la región del Sahel son múltiples y están interrelacionadas, entre ellas la proliferación de armas, la afluencia de migrantes, la propagación de la delincuencia organizada, la erosión de las instituciones estatales y el deterioro de la seguridad y la falta de protección a los derechos humanos (Witthoft, 2020: 3). El tráfico ilícito de armas y municiones, de hecho, ha exacerbado la violencia y el conflicto en el Sahel, donde se ubica un gran mercado de explotación por parte de grupos armados y redes delictivas, y ha contribuido en gran medida a intensificar el surgimiento de organizaciones terroristas y otros grupos armados.

La afluencia de migrantes y refugiados de Libia a la región del Sahel también ha intensificado la presión sobre las comunidades locales y las instituciones estatales, que luchan por satisfacer sus necesidades básicas y hacer frente a los retos sociales y económicos. La expansión de la delincuencia organizada y la corrupción han socavado en similar medida las instituciones estatales y el Estado de derecho, ya que las redes delictivas tratan de explotar las debilidades y lagunas de las estructuras de gobierno y de los sectores de seguridad (Micallef *et al.*, 2019: 52).

La erosión de estas instituciones ha exacerbado aún más el conflicto y la inseguridad, ya que las autoridades nacionales luchan por ejercer su autoridad y proporcionar servicios básicos a la población, ejercicios donde a menudo fracasan. A su vez, el conflicto y la inseguridad han intensificado la crisis humanitaria, ya que la población está expuesta a la violencia, los desplazamientos, la pobreza y las violaciones de los derechos humanos, con millones de personas en necesidad de ayudas humanitarias y sumidas en una pobreza exacerbada por el conflicto.

Además del crimen organizado, el conflicto libio parece haber tenido repercusiones de gran alcance en países como Mali, Níger, Nigeria, Burkina Faso o Chad, especialmente al servir como caldo de cultivo para la proliferación del terrorismo en el interior de sus fronteras. Numerosas evidencias oficiales apuntan a la desintegración del Estado en Libia, junto con la proliferación de armas, como catalizadores de un entorno permisivo para que los grupos extremistas planificaran y ejecutaran atentados ante unas autoridades nacionales incapaces de controlar algunas porciones de su territorio. En el caso de Daesh, su intento de creación de un califato en Libia en 2014 se vio favorecido por el vacío de poder en el país tras el derrocamiento de Gadafi, oportunidad que el grupo supo aprovechar para ocupar grandes ciudades, como Derna y Sirte, y establecer un bastión en el país (Warner *et al.*, 2020: 20). Sin embargo, su éxito en Libia fue efímero, ya que fue debilitado desde 2016 en adelante por las numerosas coaliciones y operaciones libias así como por la presencia de actores internacionales sobre el terreno. A pesar de su revés en Libia, Daesh consiguió proyectar su fuerza hacia otros países africanos en el cuerno de África, el Sahel y la cuenca del Lago Chad. En Nigeria, por ejemplo, Daesh estableció una relación con Boko Haram, proporcionando al grupo financiación y recursos a cambio de lealtad y fidelidad. Hasta su ruptura por cuestiones personales y actual confrontación, compartieron espacio, actividad y recursos, a medida que el poder de su rama en el África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) ha ido creciendo a un ritmo vertiginoso que ha terminado por subordinar a sus competidores. Por su parte, la rama de Daesh en el Sahel Occidental ha ido alcanzando un grado de autonomía que ha culminado en la reformulación de Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) a Estado Islámico en el Sahel (EI-Sahel o IS-Sahel) en marzo de 2022, movimiento estratégico que ha puesto fin a su dependencia orgánica de ISWAP. La evolución del grupo se ha caracterizado por una serie de adaptaciones estratégicas y tácticas en torno a las realidades locales para explotar al máximo sus vulnerabilidades y tensiones intercomunitarias, pasando de perpetrar atentados transfronterizos contra objetivos militares y civiles en Mali y Níger a combinar ataques convencionales de tipo insurgente contra su principal rival (JNIM) y milicias armadas.

Algunos ejemplos de países del Sahel que se han visto afectados por el efecto indirecto de la violencia y la inseguridad procedentes de Libia son Mali, Burkina Faso, Niger y Nigeria, donde también los grupos extremistas capitalizados por la rama de Al Qaeda en el Magreb Islámico, ahora integrado en el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (o coalición JNIM) o Boko Haram han podido conseguir una presencia significativa y engrosar sus recursos materiales y financieros gracias al pago de impuestos a los traficantes de drogas, la incautación de armas para promover su lucha armada o a través de la extorsión y el chantaje (Aguilera, 2022: 73). Los secuestros a cambio de rescates, práctica promovida desde principios de siglo por Al Qaeda y sus precursores en Argelia o Níger, y ahora por Boko Haram, también forma parte de esta amalgama de actividades donde terrorismo y crimen organizado se encuentran.

Si enmarcamos la relación entre el crimen organizado y el terrorismo en el paradigma posinternacional que defiende Picarelli (2006), vemos cómo hay un escenario multicéntrico donde ambos grupos criminales no encuentran una soberanía que les impida encontrar una causa común y colaborar en operaciones globales (Picarelli, 2006: 18). En esta realidad, donde bien podría contextualizarse el panorama de deterioro de la seguridad en África Occidental desde el colapso del régimen en Libia, ambos grupos criminales tienen mayor facilidad de encontrar una causa común y áreas potenciales de colaboración. Cuando tales interacciones se sincronizan y se repiten sistemáticamente, se convierte en una oportunidad de cimentar lazos más estrechos.

Fuentes consultadas por la misión interinstitucional de evaluación que las Naciones Unidas desplegó en el Sahel indicaron que parte de las armas habían sido introducidas de contrabando en la región por repatriados, especialmente por parte de antiguos combatientes de las filas del ejército libio o mercenarios durante el conflicto. Algunas de las armas, según las autoridades que informaban a la misión, podrían haber permanecido escondidas en el desierto y «venderse a grupos terroristas como Al Qaeda en el Magreb Islámico, Boko Haram u otras organizaciones delictivas» (Security Council Report, 2012: 10). Las mismas fuentes advirtieron de un aumento del comercio de armas en la región de África Occidental, manifestando un progresivo espacio compartido de actividad entre los grupos dedicados al contrabando de armas y los insurgentes. A pesar de ello, algunos países consiguieron repeler el intento de desvío de armas dentro de sus territorios. Fue el caso de Níger, cuyo ejército consiguió incautar armas, munición y explosivos sospechosos de proceder de arsenales libios a manos de combatientes retornados, traficantes de armas y terroristas de AQMI. En el caso de este último, la incautación de un convoy que transportaba 645 kg de explosivos y 445 detonadores por las autoridades de Níger alertaron que tenían como destino final el campo de AQMI en el norte de Mali, demostrando que el grupo terrorista había estado adquiriendo armamento de los arsenales libios (Security Council Report, 2012: 10).

La interacción entre las redes delictivas dedicadas al tráfico de drogas y armas y los grupos terroristas operativos en la zona se ha convertido en un importante factor de inestabilidad y violencia en el Sahel, ya que ambas se han permitido beneficiarse mutuamente de la economía ilícita libia. En marzo de 2015, nueve miembros de AQMI fueron arrestados en el norte de Níger por tráfico de drogas y armas, revelando

la investigación que habían estado vendiendo droga en el sur de Libia y que el dinero recaudado —más de medio millón de euros— era destinado a la financiación del terrorismo (Grupo de Acción Financiera Internacional, 2016: 19). La coalición JNIM, que engloba a algunos de los grupos terroristas con vínculos más desarrollados con el tráfico de drogas y el contrabando de vehículos robados (AQMI y Al Murabitún), ejerce un rol preferente como facilitador del contrabando en las zonas bajo su control y como protector del cargamento que transita la mercancía, a cambio de cuantiosas sumas que contribuyen a la financiación del grupo. También existen evidencias manifiestas que apuntan a un método empleado por AQMI basado en el reclutamiento local para el transporte de la droga a través de rutas entre Mauritania, Mali y Argelia con destino a Europa (Clarke, 2016: 5). Por su parte, Al-Shabaab forma parte de una red de tráfico de armas en Yemen, transportando municiones y armas de Yemen a Somalia a través de embarcaciones junto a miembros de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP, por sus siglas en inglés). En estos y otros muchos casos, Libia asume un rol preferente como punto de paso en el suministro a Europa, o bien discurren en su territorio las actividades delictivas de los grupos armados.

Los grupos intermediarios entre el crimen organizado y el terrorismo adoptan características y naturalezas variopintas. Estas oscilan desde organizaciones sin ánimo de lucro, utilizadas como intermediarios ante socios locales que desvían financiación y material hacia los grupos violentos, hasta individuos y redes afiliadas a organizaciones extremistas que organizan la compra y entrega de bienes ilegales como drogas y armas, facilitando el tráfico a nivel interregional (Grupo de Acción Financiera Internacional, 2013: 12-25). Los señores de la guerra no deben excluirse de esta ecuación de intermediarios entre ambos sectores criminales, al tener estos individuos una mayor autonomía que los grupos criminales y terroristas, pero también que los insurgentes y las milicias (Vinci, 2007: 38).

Los movimientos terroristas con presencia regional o transnacional, como AQMI, Boko Haram y Al-Shabaab, han capitalizado las dinámicas regionales para explotar las actividades delictivas predominantes y beneficiarse de ellas, al tiempo que tratan de aumentar su influencia política y su poder militar y financiero en la zona (Reitano, Clarke y Adal, 2017). Si ponemos el foco en Daesh tanto en el Sahel (IS-Sahel) como en la cuenca del Lago Chad (a través de ISWAP), las evidencias de financiación procedentes del crimen organizado no son tan claras al respecto. En el caso de su comando central en Irak y Siria, las evidencias son numerosas con respecto a las actividades dedicadas al contrabando de migrantes. Lo mismo ocurre entre su rama en Somalia y su homólogo en Yemen en la participación de actividades de contrabando de armas. Incluso en Libia, la franquicia de Daesh utiliza el contrabando de armas, petróleo y el blanqueo de capitales para financiar sus células en la región. Sin embargo, el historial de evidencias de los vínculos de EI-Sahel e ISWAP son escasos.

Por su parte, tanto la filial de Daesh operativa en la triple frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso como la rama en las proximidades del Lago Chad comparten una estrategia financiera de recaudación de impuestos (*zakat*), para financiar el reclutamiento de combatientes, aplican un gravamen sobre el transporte de mercancía,

excavaciones y recursos locales y llevan a cabo actividades de extorsión, robo de ganado, saqueos, donaciones y, más recientemente, secuestros a cambio de un rescate para financiar sus operaciones. En el caso de ISWAP, una de sus principales fuentes de financiación y legitimidad social pasa por gravar impuestos en el mercado legal del territorio bajo su control a transportistas, ganaderos, pescadores o agricultores, así como recompensar a aquellos comerciantes que introducen productos de contrabando. Sin embargo, cuando se trata de relacionar a estos grupos afiliados a Daesh con el tráfico o contrabando de bienes ilícitos como las drogas o las armas⁵, su uso está previsiblemente ligado al consumo y/o beneficio propio de los combatientes más que a su distribución o venta (Sampaio, 2022: 22). Por tanto, la línea de financiación del crimen organizado a las franquicias afincadas en el Sahel Occidental y la cuenca del Lago Chad no es, aparentemente, una relación de abundantes evidencias y pruebas documentales.

Con respecto a los grupos que sí cuentan con amplias evidencias de su vinculación con el crimen organizado, estas revelan un fuerte vínculo entre las economías ilícitas en Libia y el auge del terrorismo en la región del Sahel, llegando a considerar a la relación entre el crimen organizado transnacional y los grupos armados uno de los más importantes problemas de seguridad en la región de África Occidental. La proliferación de armas, drogas y otros bienes ilícitos en estas regiones se ha identificado como un factor clave que alimenta estos problemas de seguridad, teniendo a Libia en el centro del entramado delincuencia actual. El contrabando de armas, drogas y personas hacia el interior del Sahel ha creado un amplio negocio en el mercado negro y la economía sumergida, del que se han aprovechado los grupos terroristas para financiar sus estructuras y consolidar su presencia en las rutas transaharianas. La inestabilidad política y el conflicto en Libia, a su vez, han creado un vacío de poder que ha permitido prosperar esta relación de conveniencia entre los aparatos criminales y el extremismo violento, exportando desde Libia una importante fuente de inestabilidad regional.

6. Conclusiones

La economía política del comercio ilícito en Libia pone de relieve la interacción entre las dimensiones económica, política y de seguridad del conflicto, y el modo en que las economías ilícitas configuran y son configuradas por las acciones y los intereses de los actores implicados. El comercio ilícito ha demostrado representar un reto y una oportunidad para el Estado libio, al tratar de ejercer un monopolio de la violencia y estableciendo unas prácticas corruptas que alimentan la economía informal y comportamientos delictivos.

Las economías ilícitas también suponen un reto para el proceso de paz, ya que constituyen una fuente de financiación y de influencia para los grupos armados y un

5 A las armas traficadas que se introducen a través de las fronteras controladas por ISWAP se les suele aplicar un gravamen, mientras que casi todas las armas que utilizan son suministradas por intermediarios o saqueadas de los arsenales nacionales durante las emboscadas. Fuente: UNODC.

factor de inestabilidad e inseguridad para el Estado y la comunidad internacional. El presente documento ha puesto de manifiesto cómo los diversos actores implicados en el conflicto y en el proceso de paz, así como en la dinámica regional y mundial, seguirán configurando y siendo configurados por las economías ilícitas en Libia, por el hecho de perseguir sus propios intereses y aprovechar las fuentes de riqueza e influencia.

El actual orden político de Libia y la ausencia de un gobierno central operativo han creado un vacío de poder que ha permitido el surgimiento de una serie de grupos criminales y extremistas. El país se ha convertido en un centro de consolidación de economías ilícitas, como la trata de seres humanos, la proliferación de armas o el comercio ilegal de petróleo y recursos naturales. Estas actividades delictivas han tenido consecuencias de gran alcance, alimentando conflictos en toda la región del Sahel y contribuyendo al auge de grupos extremistas, lo cual ha abierto nuevos retos en materia de seguridad.

La falta de una estructura estatal unificada y eficaz y la ausencia de un aparato de seguridad operativo han facilitado la proliferación de estas prácticas ilícitas, ya que actores con diversos motivos y afiliaciones tratan de aprovechar el vacío de poder y las oportunidades de obtener beneficios. El comercio ilícito de petróleo, por ejemplo, ha sido un factor importante en la financiación de los grupos armados y la subversión del proceso de paz, al tratar los actores implicados de mantener su control sobre las instalaciones y terminales petrolíferas y maximizar sus ingresos.

A su vez, la proliferación de la economía ilícita en Libia ha demostrado actuar como catalizador de conflictos y el auge de extremismos en su vecindario más cercano. El Sahel ha terminado por caer víctima de la historia política y la violencia en Libia, sufriendo las consecuencias del tráfico de bienes ilícitos y la economía informal en el engrosamiento de grupos armados y organizaciones terroristas capitalizadas por agrupaciones como Al Qaeda, Daesh o Boko Haram. Los retos de la comunidad internacional son numerosos en este sentido, teniendo en cuenta que las amenazas a la seguridad corren el riesgo de ser exportadas con relativa facilidad a otros espacios. Por ello, la restauración del orden político en Libia se vuelve más necesaria que nunca, lo cual permitirá a su vez poner el foco en aquellas regiones que, como el Sahel, se encuentran sufriendo las consecuencias del extremismo violento en el interior de sus fronteras.

A partir de las conclusiones presentadas en el presente artículo, los futuros esfuerzos de investigación tienen la oportunidad de centrarse en el desarrollo de una comprensión global de las economías ilícitas presentes en Libia y sus conexiones con el terrorismo transnacional. Esto debería incluir el desarrollo de ejercicios de prospectiva para anticipar y mitigar futuras amenazas a la seguridad, así como un análisis más profundo de las relaciones geopolíticas entre los diversos actores presentes en Libia. De modo complementario, es necesario un seguimiento continuo del impacto de las economías ilícitas en la región del Sahel, con especial atención a la identificación y desarticulación de las redes financieras que sustentan a los grupos terroristas. Estas investigaciones proporcionarán información vital a los organismos militares y policiales, permitiéndoles desarrollar estrategias más eficaces para contrarrestar la proliferación

de economías ilícitas y la amenaza del terrorismo en la región. Las investigaciones futuras también tienen la oportunidad única de examinar el posible impacto de los acontecimientos regionales y mundiales —como la evolución de las estrategias de los grupos terroristas o los cambios en el equilibrio de poder entre los actores regionales— con respecto a la situación de seguridad en Libia y el Sahel.

Bibliografía

- AFP. (2022). Turkey and Libya sign maritime hydrocarbons deal. *France 24*. Disponible en: <https://www.france24.com/en/live-news/20221003-turkey-and-libya-sign-maritime-hydrocarbons-deal-1>
- Aguilera, A. (2022). Tráfico de drogas y yihadismo en África. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Disponible en: <https://observatorioterrorismo.com/eedyckaz/2022/06/PROYECTO-ANA-EXTERIORES-final.pdf>
- Amnistía Internacional. (2020). Libia: Nuevas pruebas sobre personas refugiadas y migrantes atrapadas en una horrible espiral de abusos. Disponible en: <https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2020/09/libya-new-evidence-shows-refugees-and-migrants-trapped-in-horrific-cycle-of-abuses/>
- Banco Mundial. (s.f.). Population, total - Libia. Disponible en: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=LY>
- Blanco, J. M. y De la Corte, L. (2013). Terrorismo y tráfico de drogas en África Subsahariana. Documento de trabajo. *Instituto Español de Estudios Estratégicos*. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2013/DIEEET01-2013_IEEE-IMDEP.pdf
- Brown, D. (2013). *The challenge of drug trafficking to democratic governance and human security in West Africa*. Strategic Studies Institute, US Army War College. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/resrep11261>
- Clarke, C. (2016). Drugs & Thugs: Funding Terrorism through Narcotics Trafficking. *Journal of Strategic Security*. Vol. 9, n.º 3, pp. 1-15.
- Conflict Armament Research. (2017). *Weapons of the Islamic State: A three-year investigation in Iraq and Syria*. Disponible en: <https://www.conflictarm.com/reports/weapons-of-the-islamic-state/>
- Departamento del Tesoro. (2018). *Treasury Sanctions International Network Smuggling Oil from Libya to Europe*. Disponible en: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/smo298>
- El-Assasy, A. (2022). Libyan Audit Bureau: 2021 Contracts Worth 35 Billion LYD. *Libya Review*. Disponible en: <https://libyareview.com/28783/libyan-audit-bureau-2021-contracts-worth-35-billion-lyd/>

- El-Gomati, A. (s.f.). *Mapping European Leverage in the MENA region*. European Council on Foreign Relations (ECFR). Disponible en: https://ecfr.eu/special/mapping_eu_leverage_mena/libya
- Freudenthal, E. et al. (2021). *No strings attached? How Europe's military support for Mali closes its eyes to abuses*. *The New Humanitarian*. Disponible en: <https://www.thenewhumanitarian.org/investigations/2021/8/26/Europe-military-alliance-Sahel-Mali>
- Grupo de Acción Financiera Internacional. (2013). *Terrorist Financing in West Africa*. FATF/OECD.
- . Grupo de Acción Financiera Internacional. (2016). *Terrorist Financing in West and Central Africa*. FATF-GIABA-GABAC. Disponible en: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-West-Central-Africa.pdf>
- IDMC. (2022). *Libya. Internal Displacement Monitoring Centre*. Disponible en: <https://www.internal-displacement.org/countries/libya>
- International Crisis Group (2018), *Drug Trafficking, Violence and Politics in Northern Mali*. Africa Report N.º 267. International Crisis Group, pp. 1-43. Disponible en: <https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali/267-narcotrafic-violence-et-politique-au-nord-du-mali>
- INTERPOL. (2021). *Massive drug seizures in twin operations across Africa and Middle East*. Disponible en: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2021/Massive-drug-seizures-in-twin-operations-across-Africa-and-Middle-East>
- Kirchgaessner, S. y Tondo, L. (2018). Malta 'fuelling Libya instability' by failing to tackle oil smuggling. *The Guardian*. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/2018/may/09/malta-fuel-oil-smuggling-libya-daphne-project>
- Lacher, W. (2023). Libya's New Order. *New Left Review*. Disponible en: <https://newleftreview.org/sidecar/posts/libyas-new-order>
- Mangan, F. (2020). *Illicit Drug Trafficking and Use in Libya*. Peaceworks. United States Institute of Peace (USIP). N.º 161. Disponible en: https://www.usip.org/sites/default/files/2020-05/20200528-pw_161-illicit_drug_trafficking_and_use_in_libya_highs_and_lows-pw.pdf
- Micallef, M. (2019). *Shifting sands — Libya's changing drug trafficking dynamics on the coastal and desert borders*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Pp.1-29. Disponible en: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/11/EDMR2019_BackgroundReport_Libya.pdf
- Micallef, M. et al. (2019). *After the Storm: Organized crime across the Sahel-Sahara following upheaval in Libya and Mali*. Global Initiative Against Transnational Organised Crime. Disponible en: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/11/After_the_storm_GI-TOC.pdf

- Noria Research. (2019). *Predatory economies in eastern Libya*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Disponible en: <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/06/GITOC-Predatory-Economies-Eastern-Libya-WEB.pdf>
- OCHA. (2022). *Libya Humanitarian Response Plan 2022*. ReliefWeb. Disponible en: https://reliefweb.int/report/libya/libya-humanitarian-response-plan-2022-december-2021-enar?_gl=1*17tfrcc*_ga*MTY0Njg4MjI5OC4xNjc0NTY1NjAw*_ga_E6oZNX2F68*MTY3NTkoMDYxMi4zLjEuMTY3NTkoMjEwNy42MC4wLjA.
- Ortega, P. (2021). España ataca la ruta africana de la droga en el Sahel. *El País*. Disponible en: <https://elpais.com/espana/2021-10-06/espana-ataca-la-ruta-africana-de-la-droga-en-el-sahel.html>
- Picarelli, J. (2006). The Turbulent Nexus Of Transnational Organised Crime And Terrorism: A Theory of Malevolent International Relations. *Global Crime*. Vol. 7, n.º 1, pp. 1-24, DOI: 10.1080/17440570600650125.
- Raineri, L. y Martini, A. (2017). ISIS and Al-Qaeda as Strategies and Political Imaginaries in Africa: A Comparison between Boko Haram and Al-Qaeda in the Islamic Maghreb. *Civil Wars*. DOI: 10.1080/13698249.2017.1413226
- Reitano, T., Clarke, C. y Adal, L. (2017). *Examining the Nexus between Organised Crime and Terrorism and Its Implications for EU Programming*. European Union. Counter-Terrorism Monitoring, Reporting, and Support Mechanism. CT-MORSE.
- Salah, H. (2023). *Already Complicit in Libya Migrant Abuse EU Doubles Down on Support*. Human Rights Watch. Disponible en: <https://www.hrw.org/news/2023/02/08/already-complicit-libya-migrant-abuse-eu-doubles-down-support>
- Sampaio, A. (2022). *Conflict economies and urban systems in the Lake Chad Region*. Global Initiative Against Transnational Organised Crime. Disponible en: <https://globalinitiative.net/analysis/lake-chad-region/>
- Security Council Report. (2012). *Letter dated 17 January 2012 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council*.
- . (2022). *United Nations Support Mission in Libya: Report of the Secretary-General*. Disponible en: <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/N2273857.pdf>
- Shaltami, O. (2019). *Petroleum System of the Murzuq Basin*. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/337104180_Petroleum_System_of_the_Murzuq_Basin
- Small Arms Survey. (2020). *Global Firearms Holdings*.

- The Economist* (2019). Foreign powers are piling into Libya. Disponible en: <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2019/12/12/foreign-powers-are-piling-into-libya>
- Tinti, P. (2020). *Drug trafficking in northern Mali: A tenuous criminal equilibrium. Research Paper*. N.º 14. ENACT. Disponible en: <https://enactafrica.org/research/research-papers/drug-trafficking-in-northern-mali-a-tenuous-criminal-equilibrium>
- UN News. (2018). As Security Council imposes sanctions on six human traffickers in Libya, UN chief calls for more accountability. Disponible en: <https://news.un.org/en/story/2018/06/1011751>
- UNICRI. (2021). *Illicit Financial Flows and Asset Recovery in the State of Libya*. Research Paper 2021. United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. Disponible en: <https://unicri.it/sites/default/files/2021-05/Libya%20EN.pdf>
- Unlacke, R. (2022). Libya Could Be Putin's Trump Card. *Foreign Policy*. Disponible en: <https://foreignpolicy.com/2022/07/08/wagner-group-libya-oil-russia-war/>
- UNODC. (2021). *Drug Market Trends: Cocaine Amphetamine-type Stimulants*. World Drug Report 2021. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Disponible en: https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_4.pdf
- . (2023). *Global report on Cocaine 2023 – Local dynamics, global challenges*. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf
- UNSMIL. (2023). Libya's 5+5 JMC and liaison committees approve a coordination mechanism for the withdrawal of mercenaries and foreign fighters from Libya. *Relief Web*. Disponible en: <https://reliefweb.int/report/libya/libyas-55-jmc-and-liaison-committees-approve-coordination-mechanism-withdrawal-mercenaries-and-foreign-fighters-libya-enar>
- US Department of State (s.f). *Country Reports on Terrorism 2019: Libya*. Disponible en: <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/libya/>
- . (2022). *Trafficking in Persons Report: Libya*. Disponible en: <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/libya/>
- Vinci, A. (2007). *Warlords in the International Order: A Neorealist Approach*. The London School of Economics and Political Science.
- Warner *et al.* (2020). *Outlasting the caliphate: The evolution of the Islamic State threat in Africa*. CTC Sentinel. Vol. 13(11), pp.18-33.
- Witthoft, B. (2020). *Human Trafficking, Smuggling and Governance in Libya: implications for stability and programming*. USAID. Disponible en: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WPXR.pdf

Zaptia, S. (2017). Libyan illegal migration trafficking and fuel “king of smuggling” arrested. *Libya Herald*. Disponible en: <https://www.libyaherald.com/2017/08/libyan-illegal-migration-trafficking-and-fuel-kingpin-of-smuggling-arrested/>

Zimmerer, M. (2019). *Terror in West Africa: a threat assessment of the new Al Qaeda affiliate in Mali*. Critical Studies on Terrorism, DOI: 10.1080/17539153.2019.1599531

Artículo recibido: 14 de febrero de 2023

Artículo aceptado: 27 de abril de 2023
